YAENS CASTELLÓN GIRALDO

Magistrada Sustanciadora

PROCESO: EJECUTIVO

RADICACIÓN: 08001315301220190015503 (43.577)

PROCEDENCIA: JUZGADO DOCE CIVIL DEL CIRCUITO BARRANQUILLA

DEMANDANTE: RAUL GARCES JAIMES.

DEMANDADOS: RC PROYECTO S.A.S, QUANTA SERVICES COLOMBIA Y OTROS.

ASUNTO: APELACIÓN DEL AUTO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 QUE RESOLVIÓ NO ACCEDER AL MANDAMIENTO DE PAGO.

Barranquilla, veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintiunos (2021).

I. ANTECEDENTES:

RAUL GARCES JAIMES actuando en su condición de secuestre, y a través de apoderado judicial, presentó demanda ejecutiva contra GRUPO CONSTRUYE SA, CONTEMAQ LIMITADA, DISTRIBUIDORA CORDOBA S.A.S., QUANTA SERVICES COLOMBIA, ASEA BROWN BOVERI COABB LTDA. RC PROYECTO S.A.S, CARLOS JOSE ARCHIBOLD INFANTE, LIEBHERR COLOMBIA S.A. pretendiendo obtener el recaudo de los cánones de arrendamiento dejados de pagar y que adeudan los inquilinos de los inmuebles embargados y secuestrados al interior del proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado Quince Civil del Circuito de Barranquilla, por lo que solicitó se librara orden de pago en su favor en calidad de secuestre, como también del señor REMEBERTO VILARÓ VELILLA JR, como acreedor y contra todos los demandados.

El 4 de septiembre de 2019¹, el A quo se abstuvo de librar mandamiento de pago por no encontrar debidamente integrado el título ejecutivo, contra lo que se vino el demandante en apelación y fue así como mediante proveído del 30 de octubre del 2019, esta Sala decidió “*REVOCAR el auto del 4 de septiembre de 2019 proferido por el JUZGADO DOCE CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, en el presente proceso ejecutivo respecto de **QUANTA SERVICE COLOMBIA S.A.S por los cánones adeudados de la bodega A2**, CONTEMAQ LTDA y CARLOS JOSE ARCHIBOLD INFANTE por los cánones de las bodegas A12 y A13, **RC PROYECTOS S.A.S para la bodega A3 desde el 22 de abril de 2019**, GRUPO CONSTRUYE SAS por la bodega D-6B y en su lugar se ORDENA al A quo que proceda al estudio sobre la admisibilidad de la demanda, conforme a lo manifestado en la parte motiva de esta providencia.*”² (negritas y subrayas fuera de texto)

En obediencia a ello, el juzgado de conocimiento despachó el mandamiento ejecutivo con sujeción a lo esbozado por esta Corporación, mediante auto del 5 de febrero del 2020, disponiendo “*En relación con las pretensiones 5', 6' y 7', como quiera que el Tribunal consideró que de los documentos arrojados como título de recaudo ejecutivo se desprende una obligación clara, expresa y exigible a cargo de los deudores QUANTA SERVICES COLOMBIA S.A.A, RC PROYECTOS SAS Y GRUPO CONSTRUYE S.A.S se ordenará librar el correspondiente mandamiento de pago*”³.

Notificada dicha providencia, los ejecutados RC PROYECTO S.A.S Y QUANTA SERVICES COLOMBIA, presentaron reposición y para el efecto, argumenta la primera la inexistencia del título ejecutivo debido a que en los contratos de arrendamientos base del litigio no figura la demandada PARQUE COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARRANQUILLA VIA 40 S.A., y que el secuestre nunca se opuso a la celebración del contrato y posterior ejecución, hasta que el 22 de abril del 2019 se le informa a la recurrente que debe de consignar los cánones al secuestre, alegando la ejecutada que ello le es imposible cumplir porque debe sujetarse al contrato, aportando los autos del 3 de julio y 23 de septiembre del 2019 expedidos por el Juzgado Quince

¹ 01 PARTE 2019-00155. Página 422. C01Principal.01PrimeraInstancia. Expediente Digital.

² CUADERNO TRIBUNAL 2019-00155. Pagina 7-17. C03. ApelacionAuto. 02 SegundaInstancia.Expediente digital.

³ 02 PARTE 2019-00155. Pagina 1. C01Principal.01PrimeraInstancia. Expediente Digital.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
Sala Primera de Decisión Civil Familia

Civil del Circuito⁴. Igualmente argumentó la segunda de las mencionadas ejecutadas que hay falta de claridad en el título ejecutivo, además de no ser expreso, falta de la declaración de existencia del contrato y falta de acreditación de la cesión del contrato de arrendamiento comercial⁵.

El auto apelado.

La A quo mediante providencia del 2 de septiembre del 2021 resolvió revocar el auto y en su lugar no acceder a librar el mandamiento de pago contra RC PROYECTOS S.A. Y QUANTA SERVICE y levantar las medidas cautelares contra las mismas, considerando que le asistía razón a los ejecutados que el título ejecutivo no cumple con los requisitos al no figurar el arrendador en los contratos como el deudor demandado en el proceso ejecutivo que dio origen a la medida cautelar y al no haberse embargo el derecho a crédito o semejantes, además que los contratos son ley para las partes.

Trámite del recurso.

Contra la anterior decisión, la parte actora interpuso apelación, fundamentado en que la Juez de Primera Instancia desconoció lo ordenado por este Tribunal, que ya había determinado que el título ejecutivo cumplía con los requisitos de ley, siendo la revocatoria una decisión arbitraria y contraria a la ley y por lo tanto solicita se revoque lo decidido.

Se procede a resolver, mediante las siguientes

CONSIDERACIONES

Con el fin de resolver el recurso de apelación, en primer lugar, se considera que la providencia cuestionada es susceptible de alzada, de conformidad con lo estipulado por el numeral 4° del artículo 321 y 438 del C.G.P., pues se trata de la fechada 2 de septiembre de 2021 que resolvió negar el mandamiento de pago. De igual forma, el medio de impugnación fue presentado tempestivamente, dentro de la oportunidad establecida en la ley.

Adentrándose la Sala Unitaria en el tema de la apelación, se tiene que de conformidad con el artículo 422 del Código General del Proceso, establece los requisitos que debe de cumplir el título ejecutivo para que sea procedente librar el mandamiento de pago, así:

“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.”

Dentro del mismo texto normativo, el artículo 430 ordena que:

“Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.

Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.

Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia de

⁴ 02 PARTE 2019-00155. Página 47-75. C01Principal.01PrimeraInstancia. Expediente Digital

⁵ 02 PARTE 2019-00155. Página 101-113. C01Principal.01PrimeraInstancia. Expediente Digital

**Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
Sala Primera de Decisión Civil Familia**

los requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del auto, podrá presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo expediente, sin que haya lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la admite, ordenará notificar por estado a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo.

Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado.

De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo.

El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios en contra del demandante, si a ello hubiere lugar.”

En este mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre los requisitos formales que debe de cumplir un título ejecutivo, manifestando que:

“los requisitos formales del título ejecutivo, están entrañados con la autenticidad del mismo y la procedencia del documento base de recaudo, es decir, que el instrumento por el cual se ejecuta sea legítimo y provenga de la persona contra quien se dirige la acción compulsiva o su génesis sea el ejercicio de la función jurisdiccional (...) Frente a ese tópico la jurisprudencia constitucional ha adoctrinado: “(...) los títulos ejecutivos deben gozar de dos tipos de condiciones: formales y sustanciales (...). Las primeras exigen que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación (i) sean auténticos y (ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme” (T-747 de 2013).”⁶

Con respecto a la función de revisión del título ejecutivo por parte del juzgador dentro del proceso ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia estableció que:

“De modo que la revisión del título ejecutivo por parte del juez, para que tal se ajuste al canon 422 del Código General del Proceso, debe ser preliminar al emitirse la orden de apremio y también en la sentencia que, con posterioridad, decida sobre la litis, inclusive de forma oficiosa (...).”

*“Y es que, valga precisarlo, el legislador lo que contempló en el inciso segundo del artículo 430 del Código General del Proceso fue que la parte ejecutada no podía promover defensa respecto del título ejecutivo sino por la vía de la reposición contra el mandamiento de pago, cerrándole a ésta puertas a cualquier intento ulterior de que ello se ventile a través de excepciones de fondo, en aras de propender por la economía procesal, entendido tal que lejos está de erigirse en la prohibición que incorrectamente vislumbró el tribunal constitucional a quo, de que el juzgador natural no podía, motu proprio y con base en las facultades de dirección del proceso de que está dotado, volver a revisar, según le atañe, aquel a la hora de dictar el fallo de instancia; otro entendido de ese precepto sería colegir inadmisiblemente que el creador de la ley lo que adoptó fue la ilógica regla de que de haberse dado el caso de librarse orden de apremio con alguna incorrección, ello no podía ser enmendado en manera alguna, razonamiento que es atentatorio de la primacía del derecho sustancial sobre las ritualidades que es postulado constitucional y que, por ende, no encuentra ubicación en la estructura del ordenamiento jurídico al efecto constituido (...).”*⁷

Igualmente resulta pertinente citar lo que ha considerado la Corte Constitucional sobre la figura del título ejecutivo complejo, así:

“Desde esta perspectiva, el título ejecutivo puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, o complejo, cuando la obligación está contenida en varios documentos. Las segundas, exigen que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona. Es decir, que establezca que el

⁶ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC351-2020, del 24 de enero del 2020 M.P.: OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE.

⁷ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC290-2021, 27 de enero del 2020. M.P.: LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA reiterada en: CSJ. STC4808 de de abril de 2017, exp. 11001-02-03-000-2017-00694-00, en STC4053 de 22 de marzo de 2018, exp. 68001-22-13-000-2018-00044-01

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
Sala Primera de Decisión Civil Familia

obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser clara, expresa y exigible. Es clara la obligación que no da lugar a equívocos, en otras palabras, en la que están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan. Es expresa cuando de la redacción misma del documento, aparece nítida y manifiesta la obligación. Es exigible si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición, dicho de otro modo, si se trata de una obligación pura y simple ya declarada.”⁸

En el presente asunto, debe dejar sentado la Sala Unitaria de entrada, que teniendo en cuenta que en este proceso y en el específico punto de si podía librarse el mandamiento ejecutivo, ya se emitió una providencia al resolver la apelación contra el auto que lo había negado, fechada 30 de octubre de 2019⁹, cuyos fundamentos deben mantenerse en respeto al precedente horizontal, pero que no es impedimento para revisar de fondo esta nueva alzada, máxime que dicho auto se emitió en una etapa germinal de la Litis, cuando ni siquiera existía la controversia y contradicción de la parte demandada, como ya a estas alturas se ha presentado. Tal circunstancia no es ajena al expediente, puesto que en dicho proveído se consideró “*lo que no es óbice para que la parte demandada, en su debida oportunidad, enderece los mecanismos de defensa que a bien tenga y que le permita la legislación*”.

Bajo este derrotero, se tiene que este proceso lo inicia RAUL GARCES JAIMES, contra varias entidades, de las cuales solo deben ser tenidas en cuenta para efectos de esta decisión RC PROYECTO S.A.S Y QUANTA SERVICES COLOMBIA, citadas en calidad de arrendatarias de las bodegas sobre las que recaían las medidas cautelares de embargo y secuestro, de las cuales el actor es el secuestre, pues este auto se circunscribe a la alzada sobre la revocatoria del mandamiento de pago respecto de los cánones de arrendamiento que se presuntamente se deben por las bodegas A2 identificada con matrícula inmobiliaria No N°040-312493 ocupada por QUANTA SERVICES COLOMBIA y la bodega A3 identificada con matrícula inmobiliaria No 040-312494 ocupada por RC PROYECTO S.A.S.

Se tiene que auto anterior de esta Sala y sobre tales bienes, se consideró:

“Respecto de la bodega A-3, el ejecutante aporta la declaración del señor CAMILO URREGO SANCHEZ como representante de RC PROYECTOS S.A.S., quien manifiesta haber suscrito contrato de arriendo "en noviembre del año 2018 con la dueña de la bodega, la señora SONIA PATRICIA ANDRADE", por valor de "seis millones de pesos" como canon y su fecha de exigibilidad, además, allegó copia de dicho contrato, lo que lleva a entrever para esta Sala Unitaria que la sociedad demandada se encuentra ocupando el inmueble en calidad de arrendataria, por lo que surge diáfano colegir que los cánones de arrendamiento deben ser pagados al secuestre, aquí demandante, pues este se encontraba a cargo de la administración de la bodega A-3, desde la celebración de la diligencia de secuestro", misma en que se rechazó la oposición de la señora SONIA ANDRADE BELL No obstante ello; la comunicación del secuestre solo fue elevada hasta el 22 de abril de 2019, fecha a partir de la cual es que pueden ser cobrados los rubros adeudados, puesto que no existe constancia que tal situación del secuestro fuera conocida y comunicada con anterioridad a esa entidad”

“De la misma manera, puede denotar esta Sala Unitaria que respecto de la misma bodega antes Mencionada (A-2), el demandante pretende cobrar los cánones de arrendamiento adeudados de los meses de abril, mayo y junio del presente año por la sociedad QUANTA SERVICE COLOMBIA S.A.S representada legalmente por MAURICIO DUQUE POSADA, para lo que aporta declaración extraproceso rendida por éste, en la que manifiesta haber suscrito contrato de arrendamiento de dicho bien en el "mes de noviembre de 2018" con la sociedad "ARENAS INMO.BILLARLAS", informando el valor del canon en "seis millones de pesos mensuales", aportando también la copia del contrato, de lo que se concluye le asiste razón al apelante y se desprende la existencia de una obligación clara, expresa y exigible, por lo meses que se pretenden cobrar, que son posteriores a la fecha de la diligencia de interrogatorio del 11 de abril de 2019.”

⁸ Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión de Tutelas, sentencia T-747-13. Del 24 de octubre del 2013.M.P: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

⁹ CUADERNO TRIBUNAL 2019-00155. Página 7-17. C03. ApelacionAuto. 02 SegundaInstancia.Expediente digital.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
Sala Primera de Decisión Civil Familia

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación advierte que no pueden prohijarse los argumentos de la A quo, debido a que tal y como lo aduce el apelante, ignoró lo decidido por esta Magistratura, pero como antes se anotó, tampoco es del caso acoger sin más análisis lo alegado por el recurrente, ignorando el medio de defensa de la parte demandada.

En este sentido, bajo las alegaciones posteriores de las partes y las nuevas pruebas del proceso, se verifica que las aludidas entidades al presentar su recursos de reposición contra la orden compulsiva, hicieron referencia a la vigencia de la medida cautelar, que es la que habilita al secuestre para administrar los bienes y eventualmente cobrar los cánones, razón por la cual esta Sala, por auto del 5 de noviembre del 2021 decretó como prueba que se diera acceso al expediente del Juzgado Quince Civil del Circuito, en el proceso ejecutivo seguido por Vilaró V & Vilaró V Abogados y Asociados Ltda y otros. radicado 08001315301420140047800, como igualmente se certificara *“el estado del proceso ejecutivo radicado consecutivo 2014-00478, la vigencia de las medidas cautelares decretadas sobre las bodegas identificadas con matrículas inmobiliarias N°040-312493 correspondiente a la bodega A2 y N°040-312494 que corresponde a la bodega A3 y de la calidad de secuestre de las mismas en cabeza del señor RAUL GARCES JAIMES, y ponga a disposición de este Tribunal y por medios tecnológicos, el expediente digital. En caso de haberse levantado dichas medidas, removido el secuestre, dado por terminado el proceso o remitido a otra Dependencia para continuar su trámite, igualmente deberá informarlo en el mismo plazo”*¹⁰.

De acuerdo con la revisión de dichas piezas procesales se pudo constatar que, en esa Litis, decretado embargo y secuestro sobre las bodegas A2 y A3 e inscrito el primero se procedió a lo segundo, designado y se le entregaron al señor RAUL GARCES JAIMES en calidad de secuestre, según diligencia realizada por el comisionado, Juzgado Veintiuno Civil Municipal De Barranquilla el día 6 de abril del 2017¹¹. También se observa que en virtud de ello se presentaron incidentes de oposición al secuestro¹² y de remoción del secuestre¹³.

Es así como ya a estas alturas se ha podido constatar que no había en esa Litis suficiente claridad que tal medida incluyera el recaudo de los cánones de arrendamiento sobre dichas bodegas, tal como se refleja en los autos de 3 de julio y 23 de septiembre del 2019¹⁴, los cuales fueron aportados con el recurso de reposición por la ejecutada RC PORYECTOS SAS¹⁵, en donde el juzgado de conocimiento de la medida cautelar que dio origen al presente proceso aclaró que no se ha decretado el secuestro de los cánones de arrendamientos de aquellos bienes que no se encuentran en posesión del demandado y que solo fue en providencia posterior donde expresamente así se reconoce mediante proveído del 17 de octubre del 2019¹⁶.

Se enfatiza que tales piezas procesales vinieron a ser conocidas posteriormente a la emisión del auto del 30 de octubre de 2019 y solamente en virtud de esta nueva apelación, es decir que el secuestre inició este proceso ejecutivo el día 27 de junio del 2019¹⁷ sin que obviamente se adosara el auto posterior en comentario fechado 17 de octubre del 2019 donde se decreta el embargo de los cánones, debiendo resaltarse además que esta determinación no expresa la forma de instrumentalizar tal medida y que debiera ser el mismo secuestre el encargado de cobrar tales

¹⁰ 02.Auto solicita prueba- expediente. 02 segunda Instancia. C05 Apelación de Auto Rad 45.577.

¹¹ 06 MEDIDAS CA CUADERNO 2. proceso 15 CTTO.08001315301420140047800 EJECUTIVO 1. página 67, diligencia de posesión del secuestre. Expediente digital remitido.

¹² 14 INC DESEM SONIA ANDRADE BELLO FMI 040-312494 Y 18 INCIDENTE DE OPOSICION AL SECUESTRO DE BOGA A-2 CON FOLIO 040-012493. proceso 15 CTTO.08001315301420140047800 EJECUTIVO 1. Expediente digital.

¹³ 19 INCIDENTE REMOCION DEL SECUESTRE. proceso 15 CTTO.08001315301420140047800 EJECUTIVO 1. Expediente digital.

¹⁴ 07.MEDIDAS CAUTELARES. Pagina 499 y 601 respectivamente. Proceso 15 CTTO.08001315301420140047800 EJECUTIVO 1. Expediente digital.

¹⁵ 02 PARTE 2019-00155. Página 47-75. C01Principal.01PrimeraInstancia. Expediente Digital

¹⁶ 07.MEDIDAS CAUTELARES. Página 635. Proceso 15 CTTO.08001315301420140047800 EJECUTIVO 1. Expediente digital.

¹⁷ 01 PARTE 2019-00155. Página 419, ACTA DE REPARTO. C01Principal.01PrimeraInstancia. Expediente Digital

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
Sala Primera de Decisión Civil Familia

cánones, lo que constituye un impedimento para esta ejecución, dejando sin legitimación al secuestre para el cobro en comento.

Pero además, la actuación que derrumba cualquier posibilidad de mantener la orden compulsiva, deviene de lo determinado por la Superintendencia de Sociedades intendencia regional de Cartagena en auto con consecutivo N°650 -000315 del 21 de agosto del 2020¹⁸ que admitió el proceso de reorganización empresarial de la sociedad PARQUE COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARRANQUILLA VIA 40 S.A. -NIT. 806.000.357-8, y además se ordenaron frente a los procesos de ejecución o cobro que se adelanten ante las autoridades judiciales y remitir, abstenerse de continuar o iniciar los mismos, disponiendo en lo referente a las medidas cautelares que:

“DÉCIMO.- Decretar el embargo de los bienes sujetos a registro de propiedad de la sociedad PARQUE COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARRANQUILLA VIA 40 S.A. NIT. 806.000.357-8, con la advertencia que las medidas cautelares de naturaleza concursal prevalecen sobre las que se hayan decretado y practicado en otros procesos.

.....

DÉCIMO TERCERO.- Ordenar al promotor, comunicar a todos los jueces y autoridades jurisdiccionales, a las fiduciarias, a los notarios y cámaras de comercio que tramiten procesos de ejecución, de ejecución de garantías, de jurisdicción coactiva del domicilio del deudor y a todos los acreedores de la deudora, sin perjuicio de que se encuentren ejecutando su garantía por medio de mecanismo de pago directo lo siguiente.

a. El inicio del proceso de reorganización. Para el efecto deberá transcribirse el aviso expedido por esta entidad.

b. La obligación que tienen de remitir a este Despacho todos los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado con anterioridad a la fecha de inicio del proceso de reorganización y advertir sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra el deudor, en los términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 2006.

c. Conforme con lo previsto en el art. 4 del Decreto 772 de 2020, las medidas cautelares practicadas sobre bienes sujetos a registro se levantarán por ministerio de Ley con la expedición de la presente providencia. Por lo tanto, el juez que conozca de la ejecución deberá entregar los dineros o bienes al deudor, incluso, si el proceso ejecutivo no hubiese sido remitido para su incorporación en el proceso concursal. El promotor o quien ejerza su función deberá verificar el destino de los bienes desembargados e informar de su destinación dentro de los siguientes 5 días a la entrega de los recursos.”¹⁹

También se pudo corroborar que lo anterior lo anterior fue cumplido, conforme lo certificó el Juzgado Quince Civil del Circuito, según lo certificó la Secretaría del mismo, que en cumplimiento de lo anterior, envió el expediente a tal autoridad el 28 de abril de este año, siendo esta última la competente de resolver todo lo referente a los procesos ejecutivos o de cobro que se adelanten en contra la sociedad PARQUE COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARRANQUILLA.

Según lo anterior, por tales circunstancias sobrevinientes el mandamiento ejecutivo no puede mantenerse, pues solo se decretaron concretamente el embargo de los cánones de arrendamiento en comento con posterioridad a la presentación de la demanda ejecutiva que dio origen a este proceso, no se expresó por el funcionario que sería el mismo secuestre el encargado de recaudarlos y luego sobre la demandada origina se dieron medidas por dicha Superintendencia, entre ellas el levantamiento del embargo, del cual prosiguió el secuestro de las bodegas antes mencionadas, remitiéndose el expediente, lo que impone la confirmación de la providencia venida en alzada, pero por razones totalmente diferentes a las consideradas por la A quo.

¹⁸08. SOLICITUD REMISIÓN PROCESO 478-2014. Auto 650-000315, página 8. Proceso 15 CTTO.08001315301420140047800 EJECUTIVO 1. Expediente digital.

¹⁹ 08. SOLICITUD REMISIÓN PROCESO 478-2014. Auto 650-000315, página 14. Proceso 15 CTTO.08001315301420140047800 EJECUTIVO 1. Expediente digital.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
Sala Primera de Decisión Civil Familia

En atención a todo lo discurrido en esta providencia, se concluye que debe confirmar la decisión de primera instancia que negó el mandamiento ejecutivo.

En mérito de lo expuesto, la Magistrada Sustanciadora de la Sala Primera de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto del dos (2) de septiembre de 2021, dictado por el Juzgado Doce Civil Del Circuito esta ciudad, dentro del proceso ejecutivo instaurado por RAUL GARCES JAIMES contra RC PROYECTO S.A.S, QUANTA SERVICES COLOMBIA Y OTROS por lo anotado en las consideraciones de este proveído.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia por no haberse causado.

TERCERO: Incorpórese esta decisión al expediente digital y una vez ejecutoriada, devuélvase el expediente al Juzgado de origen, a través de medios electrónicos

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YAENS CASTELLÓN GIRALDO
Magistrada

Firmado Por:

Yaens Lorena Castellon Giraldo
Magistrado
Sala 005 Civil Familia
Tribunal Superior De Barranquilla - Atlantico

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

9b8b0265f05874dd379080a32ca1b344ce1513dddaf1325f226c12b92127e27d

Documento generado en 29/11/2021 08:40:09 AM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>